

La burocracia asfixia el 68% de las ayudas públicas

De los 37.000 millones de los principales programas, sólo 11.600 están en ejecución. El IMV sólo llega al 41% de los hogares que se fijó como objetivo

RAFA BERNARDO
Madrid

Página 18

Millones de euros en fondos europeos y en prestaciones contra la crisis desatada por la pandemia están quedándose sin ejecutar por las complicaciones en la tramitación, las trabas administrativas y otros obstáculos a la gestión, según las cifras de organizaciones tan diversas como el

centro de análisis Funcas -de la patronal financiera CE-CA-, la organización de autónomos UPTA, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) o la alianza de ONG contra la pobreza European Anti Poverty Network (EAPN).

PROBLEMAS EN LA RECUPERACIÓN



Oscar Cañas / Europa Press

Un grupo de personas hace cola en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid.

La burocracia asfixia el 68% de las ayudas a empresas y ciudadanos

De los 37.000 millones de programas principales, sólo 11.600 están en ejecución
■ Hasta 2.500 millones para pymes y autónomos se pierden por los requisitos

RAFA BERNARDO
Madrid

Millones de euros en fondos europeos y en prestaciones contra la crisis desatada por la pandemia están quedándose sin ejecutar por las complicaciones en la tramitación, las trabas administrativas y otros obstáculos a la gestión, según las cifras del centro de análisis Funcas, la organización de autónomos UPTA, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) o la alianza de ONG contra la pobreza European Anti Poverty Network (EAPN).

Los datos muestran que de los 37.000 millones disponibles de los principales programas para apoyar a empresas y ciudadanos vulnerables —los Fondos Next Generation EU, el Ingreso Mínimo Vital y la Línea de ayudas directas a autónomos y empresas— sólo 11.600 millones

están llegando efectivamente a sus destinatarios, y el diagnóstico es unánime: la burocracia es la principal responsable.

Los Fondos europeos son el ejemplo paradigmático: de los 27.000 millones presupuestados para este año, el Gobierno asegura que se ha «adjudicado inversión por más de 10.400 millones de euros». Funcas estima, en cambio, que sólo se han puesto en marcha unos 5.700; y en esa cifra se incluyen tanto los que ya han llegado a sus destinatarios (muy poco dinero) como los transferidos a las comunidades autónomas, que todavía tienen pendientes varios pasos hasta su ejecución final.

Para Raymond Torres, Director de Coyuntura de Funcas, la diferencia con países que van mejor en la disposición de los fondos europeos, como Italia o Francia, es que allí se hace un control a posteriori, en vez

de a priori como en España. «Ellos usan el procedimiento de ventanilla: se presentan proyectos a los que se les da luz verde si cumplen ciertos requisitos, con un control bastante suave, y es después cuando hay que rendir cuentas; aquí, todo el proceso empieza con la necesidad de autorización».

Que la burocracia es el principal problema de los Fondos Europeos es una de las conclusiones clave del Informe Pulse NextGenerationEU 2021 presentado hace unos días por la consultora EY. Se trata de una encuesta sobre la forma en la que se están implementando los proyectos que se financian con los 140.000 millones pactados entre Europa y España, y las respuestas son reveladoras: la principal debilidad en la gestión de estos fondos son «los trámites administrativos precisos para la publicación de licitaciones de contratos y convocatorias de

subvenciones», muy por delante de otros problemas como la falta de personal especializado o el corto plazo de tiempo para su ejecución.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda para personas y familias en situación de pobreza severa, tiene una efectividad «aún muy débil, dados los importantes problemas para su solicitud y los

El Ingreso Mínimo Vital sólo llega a 350.000 hogares y a 800.000 personas, un 41% del objetivo inicial que se fijó

requisitos exigidos», y no está consiguiendo «dar respuesta y solución, con la urgencia y necesidad requerida, a los hogares más vulnerables, ahogados en una burocracia administrativa que dificulta que las ayudas lleguen a tiempo».

Lo dice el último informe de CCOO sobre protección por desempleo, presentado recientemente, y lo corroboran los datos oficiales: más de un año después de su entrada en vigor, esta prestación alcanza a 350.000 hogares en los que viven algo más de 800.000 personas; apenas un 41% del objetivo inicial de llegar a 850.000 hogares con 2,3 millones de integrantes.

«Los problemas son tan graves que algunos colegas los llaman violencia administrativa» explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de EAPN. Entre otros, la tramitación telemática no tiene en cuenta que tanto los hogares que ingresan menos de 900 euros al mes como los ciudadanos sin estudios o con estudios primarios presentan una brecha digital del 40% respecto al resto.

Autónomos y pymes

Por último, la esperada Línea de ayudas directas para empresas pequeñas y autónomos, que el Gobierno aprobó finalmente en marzo, se va a quedar en buena medida sin ejecutar: según los cálculos de UPTA, de los 7.000 millones previstos, 2.500 millones van a ser devueltos sin usar por las CCAA por las dificultades administrativas para acceder al dinero.

Los problemas han sido, según el Secretario General de la organización de autónomos, descoordinación entre administraciones, exigencia de demasiados requisitos para poder demostrar la situación de necesidad de los solicitantes y un mal diseño: «Los autónomos deudores con la Administración no han podido acogerse a estas ayudas. Ante la disyuntiva de comer o pagar a los proveedores y a la administración, los que optan por lo que haría cualquier ser humano, dar de comer a sus familias, han podido convertirse en deudores de la administración y quedar así fuera de los mecanismos de salvamento», asegura Eduardo Abad, presidente de UPTA.

«Tampoco entendemos que, para ser beneficiario, haya que haber tenido resultados positivos en 2019», reflexiona; «y por último, la torpeza de no dar la ayuda a todas las actividades económicas desde el principio: se autorizaron primero para 91 actividades, y luego se han hecho ampliaciones territorial por territorio para que más autónomos pudieran acogerse. Por todo esto, sólo se van a distribuir el 40% de los 5.000 millones de euros que se han facilitado para la Península [Canarias y Baleares, con ayudas y requisitos específicos, sí han usado el 100% de sus 2.000 millones]».